

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL  
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCION TERCERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

JUEZ	MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
RADICACION No.:	110013343064-2019-00337 00
MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE:	LUIS GUSTAVO CÓRDOBA FIGUEROA
DEMANDADOS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
ASUNTO	ADMITE DEMANDA

REPARACIÓN DIRECTA  
ADMITE DEMANDA

I.- OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a admitir la presente demanda, en razón a que se cumplen los presupuestos procesales de los artículos 159 a 167 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

II.- ANTECEDENTES

El 15 de octubre de 2019 correspondió a este Juzgado el estudio del la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de la referencia (fl. 158), promovida por el señor **Luis Gustavo Córdoba Figueroa** en contra de la **Nación- Fiscalía General de la Nación y Distrito Capital de Bogotá- Secretaria de Movilidad**, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial como consecuencia del error judicial de la Fiscalía General de la Nación, contenido en la Resolución de preclusión del 28 de octubre de 2013. y la cancelación del cupo y la matrícula del vehículo de placas SGQ 284, realizado por la Secretoria de Movilidad de Bogotá

En providencia del 21 de julio de 2020 (fls. 160) se inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora aclarara en que se hacía consistir el daño antijurídico, las pretensiones y los hechos atribuidos a las entidades accionadas.

Por correo electrónico remitido a este Despacho el 3 de agosto de 2021, la parte actora subsanó en debida forma la demanda. (fl. 167-168)

Para resolver sobre la admisión de la demanda, el Despacho estudia lo siguiente:

### **III.- CONSIDERACIONES**

#### **3.1.- JURISDICCIÓN**

Con la presente demanda, la parte actora está ejerciendo el medio de control de reparación directa, pretendiendo que los demandados sean declarados extracontractualmente responsables como consecuencia del error judicial de la Fiscalía General de la Nación contenido en la Resolución de preclusión del 28 de octubre de 2013. y la cancelación del cupo y la matrícula del vehículo de placas SGQ 284, realizado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

#### **3.2.- COMPETENCIA**

Este Despacho de la Sección Tercera de la oralidad, tiene competencia para conocer en primera instancia la presente demanda de reparación directa, en virtud de lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y como quiera que en el presente asunto se reclaman perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado que no superan el límite de los 500 s.m.m.l.v. allí establecidos, por cuanto se fijó en la suma de \$33.000.000 (fl. 42)

Y en cuanto al factor territorial, el numeral 6° del CPACA establece que la competencia se determina por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.

#### **3.3.- OPORTUNIDAD**

De conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, frente a la demanda en ejercicio de la pretensión de reparación directa, establece las reglas que han de tenerse en cuenta para el efecto. Concretamente el término es de dos (2) años que se contarán: “a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

En el escrito de subsanación se expuso como pretensiones:

**“1.- Como resulta palmaria la contra evidencia , el error craso que cometió la Fiscalía (sic) 175 Seccional Unidad Ley 600 de 2000 de Bogotá D . C. , con la expedición de la **Resolución de Preclusión de la Investigación de fecha 28 de octubre de 2013 y sus providencias complementarias;** y la Secretaria de Movilidad de Bogotá D. C. al **dictar los autos numero 55637 , de fecha 25 de septiembre de 2017 y numero 63993 de fecha 31 de octubre de 2017,** acogiendo la ilegalidad de su predecesor . Para ambas entidades con el elemento a sabiendas y conocimiento del hecho , de que el vehículo de placas SGQ 284 no fue objeto de chatarrización . **Razón evidente para que sus actuaciones, tanto jurisdiccionales como administrativas, sean y son constitutivos de error judicial y administrativo**, actuaciones por cuya virtud se comprometió la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y la Secretaria de Movilidad de Bogotá D. C. , quienes deberán reconocer los daños materiales y morales causados al señor LUIS GUSTAVO CORDOBA FIGUEROA (...)”**

En el caso bajo estudio la parte actora, hizo consistir el daño en la cancelación del cupo del vehículo de servicio público de placas SGQ 284, realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, mediante auto No. 55637 de 2017, corregido mediante auto No. 63993 de 2017. Actos administrativos preferidos en cumplimiento de la resolución del 22 de noviembre de 2016 emitida dentro del radicado 777296 por la Fiscalía 152 Seccional Unidad Ley 600 de 2000.

Adicionalmente la parte actora manifestó como hecho dañoso el error judicial en que incurrió la Fiscalía General de la Nación, contenido en la **Resolución de fecha 28 de octubre de 2013 que ordenó la Preclusión de la Investigación en favor de Rosalba Ardila Duarte y Pedro Enrique Galeano Becerra dentro del sumario No. 777296, proferida por la Fiscalía 175 Seccional de Bogotá y su auto aclaratorio del 22 de mayo de 2014.**

En este entendido, la litis se analizará de acuerdo con los argumentos empleados por la parte demandante frente a cada una de las entidades enjuiciadas, así:

### **Fiscalía General de la Nación:**

La Ley 270 de 1996 norma estatutaria de la administración de justicia, consagró el régimen de responsabilidad ocasionado en el ejercicio de la actividad judicial. De forma concreta, en lo que atañe a la imputación efectuada por el demandante a la Nación-Fiscalía General de la Nación, esto es, el error judicial, la mencionada norma en su artículo 66 lo definió como el *"cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley"* y consagró en su artículo 67 *ibidem* los presupuestos para su ocurrencia, así:

*"1.- El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.*

*2.- La providencia contentiva de error deberá estar en firme."*

De lo expuesto se evidencia que el legislador estableció la obligación de agotar los requisitos de ley contra la providencia cuestionada previo a incoar la demanda bajo este especial título de imputación, lo cual se advierte desde ya no fue acatado en el sub examine. Con relación al computo de la caducidad en el presente evento el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo<sup>1</sup> en un reciente pronunciamiento sostuvo que:

*"(...) la Sección Tercera de esta Corporación, ha sostenido de manera reiterada que, **cuando se pretende, como en este caso, la declaración de responsabilidad del Estado por error judicial, el término de caducidad debe empezar a contarse a partir de la ejecutoria de la providencia que contiene el presunto error, pues desde ese momento se entiende consumado el daño***<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Consejero Ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2019 Radicación: 08001-33-33-010-2013-00777-02 No. interno: 63.348 Actor: Osvaldo Olimpo del Castillo Torres. Demandado: Nación - Consejo Superior de la Judicatura y otros. Referencia: Reparación directa (Ley 1437/11)

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, providencias de: 26 de noviembre de 2015, Exp: 38833; 30 de agosto de 2017, Exp: 39435; 13 de junio de 2016, Exp: 37392; 22 de febrero de 2017, Exp: 58052, entre muchas otras.

*(...) si bien es cierto el demandante interpuso acción de tutela contra dicha providencia, la cual resolvió en segunda instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y se notificó el 31 de marzo de 2012<sup>17</sup>, no puede, como lo pretende el recurrente, computarse el término desde esa fecha, pues tal y como lo ha señalado esta Corporación<sup>3</sup>."*

Así entonces, en la demanda por error judicial se exige formular los recursos que le sean procedentes a la decisión judicial enjuiciada. Una vez ésta se encuentre ejecutoriada iniciará el computo de los 2 años correspondientes para acceder a la administración de justicia. Vale resaltar que el artículo 164 del CPACA si bien estableció la posibilidad que el daño fuera conocido por el demandante de manera posterior a su realización, impuso también la carga de acreditar la imposibilidad de conocerlo desde su ocurrencia.

Con lo anterior de marco, se advierte que la providencia atacada por el presunto error judicial de la Fiscalía General de la Nación, es la Resolución de preclusión del 28 de octubre de 2013. Investigación iniciada por la denuncia del señor Olegario Córdoba Figueroa el 08 de septiembre de 2004 en contra de personas indeterminadas por los delitos de hurto calificado y agravado, falsedad en documento público, por la cancelación del cupo y la matrícula del vehículo de placas SGQ 284, que había comprado y que posteriormente entregó a su hermano Luís Gustavo Córdoba Figueroa (demandante) en dación en pago (fls.68 a 77). Así como la Resolución aclaratoria del 22 de octubre de 2014 (fls. 78 a 81). Vale mencionar que no reposan en el expediente las constancias de ejecutoria de las mencionadas decisiones, sin embargo, teniendo en cuenta la Ley 600 de 2000<sup>4</sup> vigente para la época, quedaron ejecutoriadas el **04 de junio de 2014**. En consecuencia, el término de dos (2) años venció el **04 de junio de 2016**, de ahí que se evidencia que al radicar la solicitud de conciliación extrajudicial el 19 de julio de 2019 (fls.

---

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, providencias de: 7 de mayo de 2018, Exp: 40187; 8 de febrero de 2017, Exp: 40731, entre otras

<sup>4</sup> **Ley 600 de 2000**

**Artículo 178. Personal.** (...)Las notificaciones al sindicado que no estuviere detenido y a los demás sujetos procesales se harán personalmente si se presentaren en la secretaría **dentro de los tres (3) días siguientes al de la fecha de la providencia, pasado ese término se notificará por estado a los sujetos procesales que no fueron enterados en forma personal.**

La notificación personal se hará por secretaría leyendo íntegramente la providencia a la persona a quien se notifique, o permitiendo que ésta lo haga.

**Artículo 179. Por estado.** Cuando no fuere posible la notificación personal a los sujetos procesales, **se hará la notificación por estado que se fijará tres (3) días después, contados a partir de la fecha en que se haya realizado la diligencia de citación** efectuada por el medio más eficaz o mediante telegrama dirigido a la dirección que aparezca registrada en el expediente, citación que deberá realizarse a más tardar el día siguiente hábil a la fecha de la providencia que deba ser notificada. **El estado se fijará por el término de un (1) día en secretaría y se dejará constancia de la fijación y desfijación**

135 a y 136) y la demanda el 15 de octubre de 2019 ( fl. 158), se prevé que acudió a la administración de justicia por fuera de la oportunidad legal, para demandar por el error judicial contenido en las resoluciones de la Fiscalía general de la Nación. Razón por la que la demanda será rechazada frente a ésta entidad.

### **Alcaldía Mayor de Bogotá-Secretaría de Movilidad**

El motivo de inconformidad del accionante con relación a la Alcaldía mayor de Bogotá-Secretaria de Movilidad se centró en la expedición de los autos No. 55637 del 25 de septiembre de 2017 y No. 63993 del 31 de octubre de 2017 (fls. 85 a 86). Por regla general, el medio de control instituido para reparar los daños originados con la expedición de un acto administrativo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, no desconoce el Despacho que jurisprudencialmente se han aceptado algunos eventos en los que es posible acudir al medio de control de reparación directa para demandar por los perjuicios ocasionados por un acto administrativo. Cabe enfatizar en la importancia de establecer el origen del daño que se alega para elegir el medio de control idóneo para acceder a la administración de justicia y si para el caso en estudio se cumplen algunas de las excepciones que para el efecto ha sostenido la sección Tercera del Consejo de Estado, así<sup>5</sup>:

#### **“ Cuando no se pretende la nulidad del acto administrativo demandado**

*En esta hipótesis se persigue la reparación de los daños causados con la expedición de **un acto administrativo cuya legalidad no se cuestiona** y que a pesar de ello produce un perjuicio que pone al afectado en una situación de desequilibrio de las cargas públicas. En estos eventos, los perjuicios tienen origen en una actividad lícita y legítima del Estado. (...)*

#### **➤ Cuando se reclaman perjuicios derivados de un acto administrativo general revocado o anulado**

*(...)En este evento se ha entendido que el daño ocasionado a los administrados había estado cobijado por una presunción de legalidad, pero tornó en antijurídico dado que fue reconocido como ilegal por la administración o la jurisdicción y por lo mismo, hubo de desaparecer del mundo jurídico de manera*

---

<sup>5</sup>Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, providencia del 9 de noviembre de 2017, exp. n° 59239. C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

que cesó para los administrados el deber de soportar sus efectos<sup>6</sup>.

Es menester recordar que, únicamente procede la reparación directa cuando, entre el daño y el acto administrativo general, no existe un acto administrativo particular **que pueda ser objeto de control jurisdiccional**, de ser así probablemente exista una situación jurídica consolidada... (...)

➤ **El decaimiento del Acto Administrativo**

En este punto, se debe recordar que el decaimiento de los actos administrativos, esto es, la pérdida de su fuerza de ejecutoria, tiene aplicación cuando desaparecen los fundamentos fácticos o jurídicos que dieron lugar a su expedición, pues en este evento se torna imposible exigir el cumplimiento de lo ordenado.

No obstante, no puede pasarse por alto que cuando el acto administrativo está ejecutado y el mismo no fue recurrido, los efectos surtidos se mantienen en virtud de la presunción de legalidad que lo cobija y la consolidación de la situación jurídica creada. (...)

➤ **Cuando el daño proviene de la ejecución irregular de un acto administrativo**

(...)Esta circunstancia **es lo que se conoce como una operación administrativa ilegal** cuya indemnización debe ser reclamada vía reparación directa, por no encontrarse tampoco en debate la legalidad del acto administrativo que le dio origen, sino la forma defectuosa o irregular en que la administración lo ejecutó."

De igual forma y en concordancia con lo anterior, la jurisprudencia ha determinado que es viable la acción de reparación directa, cuando se trata de perjuicios causados por la expedición de un acto administrativo cuya legalidad no se discuta en el curso del proceso, lo anterior, puesto que la jurisprudencia reconoce que el ejercicio de la función administrativa ajustado al ordenamiento jurídico, puede generar un rompimiento del equilibrio de las cargas públicas que deben soportar todos los ciudadanos.

---

<sup>6</sup>Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de abril de 2013, exp. n° 26437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. (Referencia de la providencia en cita).

En este orden de ideas, se observa que: (i) de las pretensiones de la demanda se evidencia que ninguna de ellas se encuentra encaminada a la declaratoria de nulidad de ningún acto administrativo proferido por las entidades demandadas, al contrario, las mismas van encaminadas a que se declare administrativamente y extracontractualmente responsable a la Secretaría Distrital de Movilidad, por la falta y/o falla en el servicio derivada de las omisiones inmersas en los actos administrativos que ocasionaron el daño que se afirma ocasionado en razón a la presunta falla de la administración en que incurrió la entidad demandada, aducido según la demanda en la inhabilitación del registro y la matrícula del vehículo de placas SGQ 284.

Bajo este hilo conductor, debido a la incertidumbre sobre el momento en que se llevó a cabo la notificación de los actos administrativos que se analizan, se tomará el **06 de junio de 2018** como fecha de notificación por conducta concluyente, por virtud de la revocatoria directa formulada por el señor Luis Gustavo Córdoba Figueroa en contra de los autos número 55637 del 25 de septiembre de 2017 y número 63993 del 31 de octubre de 2017 (fls. 87 a 94).

En consecuencia, el término de dos (2) años vencieron el **07 de junio de 2020**, como quiera que la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó 19 de julio de 2019 (fls. 135 a y 136) y la demanda se presentó el 15 de octubre de 2019 ( fl. 158), se tiene que frente a la pretensiones respecto del Distrito Capital de Bogotá- Secretaría de Movilidad la parte actora acudió en el término previsto en el artículo 164 del CPACA.

### **3.4.- REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD**

La parte actora demostró el cumplimiento de lo establecido en el numeral 1° del artículo 161 del CPACA, al haber agotado el requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial en derecho, allegando la constancia emitida por la PROCURADURÍA 142 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA, que da cuenta que la parte demandante convocó a la demandada. Conciliación que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio. (fl. 135-136)

### **3.5.- LEGITIMACIÓN**

**Por Activa:** En el presente caso se advierte que el demandante **Luis Gustavo Córdoba Figueroa**, se encuentra legitimado en la causa por



activa, por cuanto es la víctima directa de la cancelación del cupo del vehículo de placas SGQ 284.

**Por pasiva:** De conformidad con la situación fáctica en que se fundamentó el presente medio de control, se establece que la causación del presunto daño antijurídico, guarda relación con la cancelación del cupo del vehículo de placas SGQ 284, por parte de la Secretaria de Movilidad del Distrito. En ese sentido, la entidad demandada se encuentra legitimada de hecho por pasiva.

### **3.6.- REQUISITOS FORMALES**

La demanda también cumple con los requisitos de los artículos 162 y 163 del C.P.A.C.A., relacionados con la designación de las partes y sus representantes; las pretensiones expresadas de manera clara y precisa; los hechos y omisiones en que se fundamentan; los fundamentos de derecho que las soportan; la solicitud de pruebas que se quieran hacer valer y; el lugar y dirección donde las partes recibirán las notificaciones personales.

Igualmente se acompañó copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, al Ministerio Público.

Entonces, como revisado el contenido de la demanda y de sus anexos, se advierte que ésta reúne los requisitos para que la misma sea admitida, se procederá en tal sentido.

En consecuencia, el **JUZGADO SESENTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**,

#### **RESUELVE:**

**1.- RECHAZAR** por caducidad la demanda respecto de la Fiscalía General de la Nación, por lo expuesto en la parte motiva.

**2- ADMITIR** la presente demanda de reparación directa presentada por **Luis Gustavo Córdoba Figueroa**, contra el **Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Movilidad Distrital**.

**3.- NOTIFICAR PERSONALMENTE** a la Alcaldesa Mayor de Bogotá-Secretario de Movilidad del Distrito, o quien haga sus veces, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA, Modificado por el artículo 612

de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.  
A la parte actora<sup>7</sup> notifíquese por anotación en estado.

4.- **NOTIFICAR** al señor AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA, Modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

5.- **CORRER TRASLADO** de la demanda a la parte demandada por el término de TREINTA (30) DÍAS de conformidad con lo preceptuado en el artículo 172 del CPACA.

6.- **ADVERTIR** a la demandada que conforme a lo dispuesto por el numeral 4° y el párrafo 1° del artículo 175 del CPACA, deberán allegar con la contestación de la demanda todas las pruebas que pretendan hacer valer y que reposen en su poder.

7.- **ADVIÉRTASE** también a las partes, que conforme dispone el artículo 78 numeral 10° del CGP, es su deber abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir. Lo anterior, en armonía con lo previsto en el 173 del mismo estatuto, según el cual el juez se abstendrá de ordenar el decreto de tales probanzas, salvo que la parte hubiera presentado petición para ello y no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

8.- Adviértase a las partes que, toda actuación que se adelante en el presente trámite mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en virtud de la pandemia de COVID -19, deberá remitirse únicamente al correo electrónico [correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co), y no en forma física.

9.- **RECONOCER** personería al Dr. Elías Ramírez Ayala, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.392.518 y TP No. 37.614 del C. S de la J como apoderado de la parte demandante en los términos del poder visible a folio 47.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**Magda Cristina Castañeda Parra**  
**JUEZ**

---